

Crónica de una revuelta anunciada

Mario Garcés D.
Historiador

Nos llegó marzo

En un trabajo reciente de la historiadora Verónica Valdivia, se lee que, en la víspera de la República Socialista del 4 de junio de 1932, un grupo de estudiantes parados en la puerta de la Universidad, recibió unos volantes en que se leía: “mañana estalla la revolución social” y una joven estudiante de doce años recibió ese mismo día, de sus profesores, un panfleto que decía “la revolución se hará mañana aunque llueva”.¹

El contexto de la crisis de 1931-32 es por cierto muy diferente al de crisis social y política por la que atraviesa hoy la sociedad chilena, sin embargo, durante este verano de 2020, hemos vivido algo así como la *crónica de una revuelta anunciada*. Se estima, en los medios, en las redes sociales, en los movimientos sociales, en los círculos del poder económico y estatal, así como en la opinión pública, que marzo será un mes de grandes movilizaciones que podrían derribar al gobierno, cancelar el plebiscito de abril o tensar al máximo la crisis política afectando significativamente el “orden público”, máximo valor social y político para los grupos en el poder.

Consideremos solo algunos datos que avalan este horizonte de crisis.

- a) La movilización social se ha mantenido durante todo el periodo estival, en menor magnitud de participantes, pero no por ello con menor intensidad. La Plaza de la Dignidad nunca fue abandonada, especialmente en sus convocatorias de los días viernes.
- b) Los protagonistas de enero e inicios febrero fueron los estudiantes secundarios que buscaron boicotear la realización de la PSU (Prueba de Selección Universitaria), con efectos significativos, que llevó a que las pruebas se rindieran bajo estricto control policial. Se llegó a especular, de que se rindiera en los regimientos
- c) También en enero, se produjeron diversas manifestaciones en contra de la Policía en la comuna de Pudahuel, luego que un vehículo de Carabineros atropellara brutalmente a un joven de esa comuna. Varias noches de movilizaciones y enfrentamientos protagonizaron los pobladores de Pudahuel
- d) A fines de enero, dos barristas de Colo - Colo perdieron la vida, Jorge Mora en las afueras del Estadio Monumental, el día 28 y Ariel Moreno, en una manifestación

¹ Verónica Valdivia. *Subversión, coerción y consenso. Creando el Chile del siglo XX (1918-1938)*. LOM Ediciones, Santiago, 2017. P. 245.

en Padre Hurtado, el día 31. En el primero, la participación de Carabineros fue visible para todos –y reconocida por la Policía- mientras que en el segundo se ha tendido un manto de dudas (y es objeto de investigación), aunque algunos testigos responsabilizan a Carabineros. Antes y sobre todo después de la muerte de los barristas, el fútbol profesional ha sido puesto en cuestión y se han sucedido las protestas en los estadios en contra del gobierno y de la policía.

- e) En el mes de febrero, las manifestaciones se han reproducido en Santiago, especialmente en la comuna de Puente Alto y Peñalolén –ambas comunas populares- así como en provincias con ataques a la Intendencia de Valparaíso, a cuarteles policiales, y saqueos de diversa magnitud en distintas ciudades del país. Antofagasta, Valparaíso, Concepción y Osorno han concentrado el mayor número de manifestaciones y enfrentamientos con la policía.
- f) A mediados de febrero, se produjeron al menos dos manifestaciones de los partidarios del rechazo al cambio de la Constitución, en el barrio alto de Santiago, en las inmediaciones de la Escuela Militar. Llamó la atención lo bien organizados y los carteles todos iguales y bien producidos, así como el discurso anti-comunista de algunos de los manifestantes entrevistados por la Televisión (como una suerte de retorno a los años de la Unidad Popular).
- g) Finalmente, en la víspera del Festival de Viña del Mar, que se realiza la última semana de febrero, se han incrementado las medidas de seguridad y no se logra prever ni el carácter ni la magnitud que puedan alcanzar las manifestaciones de protesta. De hecho, en enero fueron *funados* algunos humoristas en festivales de provincias y el conocido animador, Kike Morandé en la ciudad de Río Bueno.

Hay por cierto muchos más datos de movilizaciones y enfrentamientos en enero y febrero de 2020. Sin embargo, los mencionados marcan algunas tendencias que pudieran tener efectos en el crítico “marzo” anunciado: 1) Las movilizaciones se han mantenido; 2) Carabineros sigue acumulando rechazos y resentimientos que no se borrarán fácilmente de la memoria de los chilenos; 3) Los actores más movilizadas –estudiantes, barristas y pobladores- lo hacen cada vez con mayor radicalidad; 4) los ataques a cuarteles policiales y edificios públicos así como los saqueos a supermercados, que no han sido frecuentes en nuestra historia reciente, se han ido instalando como una forma de protesta, a pesar incluso de las nuevas leyes represivas que penalizan estos actos.

A este cuadro de movilizaciones acontecidas se suman las anunciadas y confirmadas para marzo: 8 de marzo: Marcha de las Mujeres; 9 de marzo: Paro Nacional Feminista; 11 de marzo: Protestas en el segundo aniversario del gobierno de Piñera; 29 de marzo: Día del Joven Combatiente. No confirmadas: paros estudiantiles de secundarios y universitarios, marchas por la vivienda y NO+ AFP. Según el diario electrónico El Desconcierto, Carabineros registra 25 convocatorias de marchas para marzo; otros medios anuncian un “marzo rojo”; y otros, un “Segundo Estallido Social”.

Todos estos datos parecieran avalar la idea de que marzo será un mes de activa movilización social. Sin embargo, es difícil prever su magnitud y sus efectos, de tal manera que la crónica de una revuelta anunciada es ya *una disputa* por el futuro inmediato de la política chilena. La expectativa de la movilización será usada por el gobierno para extremar las medidas represivas y demostrar que logra mantener el control del “orden público”, lo que podría derivar en un nuevo “estado de emergencia”² (en el Chile estatal, *el orden público tiene mayor valor que el respeto a los Derechos Humanos*); también podría ser una excusa para bloquear o suspender el proceso constituyente, lo que supondría un nuevo acuerdo entre la clase política, esta vez basado –muy probablemente– en la defensa del “orden público”

Por su parte, para los sectores populares y ciudadanos –diversos, por cierto– las movilizaciones de marzo estimulan más de una lectura, desde los que estiman que ahora sí el gobierno puede caer en medio de una crisis de gobernabilidad; para otros, dependiendo la magnitud de las movilizaciones, redefinir el proceso constituyente asegurando un mayor protagonismo ciudadano³; para otros, iniciar de una vez, de manera más profunda los postergados cambios sociales. No se puede descartar tampoco una suerte de repliegue ciudadano por efectos de la represión y la manipulación gubernativa y televisiva con relación a la “violencia” y la necesidad de reestablecer el orden público.

Otra alternativa, que comienza a delinearse, mientras escribo estas líneas, es la posibilidad de un nuevo “Acuerdo Nacional” de la clase política chilena, que sume al gobierno con la ex Concertación, de la DC, el PS y PPD. En una declaración, conocida el 25 de febrero, 231 personeros de la ex Concertación, de hecho han propuesto tal acuerdo en torno tres ejes: Programa social relevante y sostenible; Paz social y orden público; Recuperación y crecimiento de la economía⁴. De estas tres propuestas, la 1 y la 3 no agregan nada nuevo a lo conocido, de tal modo que la más relevante es la que insiste en el “orden público”.

¿Qué efectos podría tener un acuerdo de esta naturaleza?

Es difícil de prever, pero un acuerdo de esta naturaleza, que comenzó a fraguarse a fines de enero, en reuniones entre los presidentes de RN y PS, PPD y DC, podría, al menos como hipótesis: a) Alinear a la clase política en torno al orden público desgajando a sectores medios de las movilizaciones y aislando a los movimientos sociales y grupos más radicales; b) Dependiendo del carácter y la magnitud de la movilización, un nuevo “estado de emergencia” con apoyo más transversal de la clase política; c) Y, por qué no, un “Gobierno de Unidad Nacional” que redefina y controle “desde arriba” el proceso constituyente y la agenda social.

² Ya admitido, como una posibilidad, por Piñera en entrevista en TVN, Domingo 1 de marzo de 2020

³ Existen diversas alternativas en este plano, que van desde promover una Constituyente Autónoma de los movimientos sociales y ciudadanos hasta influir en una redefinición de los términos el proceso constituyente, luego del Plebiscito del 26 de abril de 2020.

⁴ Diario digital El Mostrador, 25 de febrero de 2020

Lo único claro, por ahora, es que no está prescrito el resultado de las movilizaciones de marzo. Estas y las respuestas del gobierno y los partidos políticos del orden, no serán si no otra manera de dirimir los conflictos por los que atraviesa hoy la sociedad chilena. Si bien el tiempo apremia a todos los actores políticos, lo que no cambié en marzo, se redefinirá bajo nuevas formas en los meses venideros.

El gobierno y la clase política: “no se oye padre”

En el mes de diciembre, Sebastián Piñera, declaró a un medio “que lo peor ya ha pasado”. En esta frase pareciera resumir el deseo, tanto de su gobierno como de muchos sectores en el poder económico y político. “Volver a la normalidad” ha sido otra expresión que se ha escuchado reiteradamente desde estos mismos sectores, y que los medios reproducen como un deseo de la mayoría de los chilenos.

Me parece que la idea de fondo, o el deseo de fondo, es que la crisis que desencadenó el “estallido social” del 18 de octubre de 2019 se pueda conjurar sin afectar las bases del modelo neoliberal y la postura de la derecha más conservadora, de propiciar el rechazo al cambio constitucional, es que la crisis se pueda enfrentar sin afectar las bases del modelo político.

Hasta antes del golpe militar, el pueblo denominaba a la derecha conservadora, como los “momios”, aludiendo a las momias de Egipto, que por más que el tiempo pasara no cambiaban, permanecían inmovibles. Por cierto, la derecha actual no es la misma, ha vivido cambios significativos, pero algo ha heredado del pasado. Su débil vocación democrática y su resistencia al cambio. Pero, también se podría ir al pasado y reconocer la tradición portaliana, que afirmaba que el orden es necesario para los negocios, el desorden no favorece los negocios, razón por la cual sugería el Ministro Portales, organizador de la República Conservadora en el siglo XIX, “el principal resorte de la máquina es el peso de la noche”.

Si se evalúan los cambios sociales introducidos por la agenda legislativa del gobierno son todos menores, incluso el de las pensiones. Aun así, la derecha proclama que los cambios se pueden hacer sin cambiar la Constitución. Si se tuvieran en cuenta, la priorización de cambios que arrojó la consulta municipal de diciembre de 2019 –pensiones, salud, educación, salarios- ninguna de ellas se ha considerado seriamente, solo a medias o muy parcialmente.

En este contexto, los políticos chilenos hacen sus cálculos con relación al plebiscito de abril, las municipales de octubre y más alguno, las presidenciales de 2021. En los programas de televisión los argumentos van y vienen, a la usanza tradicional, pero la voz del pueblo no cuenta, no se escucha. Solo se llama la atención sobre la violencia y se la

condena: vándalos, violentistas, delincuentes, terroristas, bárbaros hasta incluso algunos han querido identificar a violencia popular como una suerte de fascismo.

En realidad, mientras los políticos chilenos y los medios de comunicación no escuchen al pueblo, vivirán las movilizaciones como amenaza y solo apostarán por la mantención del orden público, mediante la represión, como principal medio para conjurar la crisis.

A fines de enero, el gobierno, a través del Ministerio de Defensa elaboró un decreto, denominado RUF (Reglas para el Uso de la Fuerza) que define normas y procedimientos para el uso de la fuerza, por parte de las Fuerzas Armadas en “estados de excepción”. Se busca precisar conductas que no estaban bien definidas, especialmente para los militares, durante el estado de emergencia de octubre de 2019. La Contraloría debía proceder, a fines de febrero, a realizar la “toma de razón” del mencionado decreto que, en situaciones de ataque extremo -y agotados los medios disuasivos- a cuarteles militares o “infraestructura crítica”, permite el uso de armas de fuego. El Estado afina sus recursos coercitivos⁵.

¿Salidas más probables a la crisis?

La pregunta para todos los actores es cuánto se puede avanzar en la resolución de la crisis durante el mes de marzo. Si se tienen en cuenta los datos que provienen del gobierno y de la clase política, así como del movimiento ciudadano, lo más probable es que se prolongue una suerte de “empate catastrófico” de fuerzas, en el que ni el proyecto estatal dominante ni el proyecto ciudadano en ciernes logran imponerse, acentuándose sobre todo el poder coercitivo del primero, con altos costos para la sociedad, mediante la represión y la violación de los derechos humanos. Sin embargo, un nuevo “Acuerdo Nacional” de la clase política podría dar más *tiempo político* a los grupos en el poder para organizar el control por arriba de la sociedad. Sin embargo, ello no está asegurado y podría también generar –y ya está generando- nuevos rechazos en la sociedad.

Por otra parte, no se puede descartar que una profundización de la crisis abra espacios para la configuración de nuevas iniciativas y proyectos políticos, que aseguren desde una perspectiva ciudadana, avanzar hacia: a) Una Asamblea Constituyente genuinamente democrática; b) Una agenda social activa y vigorosa; c) Una Comisión de Verdad que haga posible la justicia con relación a la violación de los Derechos Humanos.

Una alternativa de esta naturaleza no es tan sencilla de materializar, ya que requiere consensos y alguna forma de articulación y tal vez, de representación, procesos que han tomado y todavía tomarán tiempo en constituirse, en los actuales espacios de debate

⁵ En la entrevista a TVN del domingo 1 de marzo, Piñera afirmó que ahora estaban mejor preparados – especialmente Carabineros, con más recursos, tecnología, inteligencia, renovación de equipos- para enfrentar una mayor alteración del “orden público”.

ciudadano: las Asambleas Territoriales; los movimientos sociales más activos: feministas, estudiantil, ambientalistas, mapuche; los trabajadores y su un tanto alicaída Unidad Social.

El actual movimiento ciudadano, diverso y heterogéneo en su composición, si bien cuenta con actores más configurados, desde el inicio de Estallido Social ha constituido una experiencia inédita de organización más que de un movimiento social específico, de un *movimiento de la sociedad*⁶, en el sentido de que se trata de un conjunto diverso de actores sociales que se organizan, se movilizan y hacen visible no solo su malestar con relación a la desigualdad social y la institucionalidad en su conjunto, sino que expresan su voluntad y su deseo de generar nuevas relaciones de poder, desde el ejercicio directo de la soberanía popular, horizontal y democrática.

El Estallido Social, como sostuvimos en sus inicios⁷, dio lugar a una movilización social que carecía de una orgánica, un partido u otra forma de “convocante central” como había ocurrido otras veces en la historia de Chile. Este fue un movimiento de otra naturaleza, separado de las dinámicas del Estado, que emerge desde la sociedad civil y como protesta en contra del Estado, del gobierno, de la clase política y de la institucionalidad vigente. Pero, en segundo lugar, se trató de un movimiento que debía constituirse en la propia movilización, es decir, desde sus inicios ha tenido –y tendrá muy probablemente- un carácter *procesual*. No estaban prescritas ni las formas, ni el alcance, ni el programa, ni las metas de corto y largo plazo. Y, sin embargo, si se sigue su desarrollo, este *movimiento de la sociedad* ha ido generando, en grados diversos, consensos programáticos (pensiones, salud, educación, salarios derechos humanos, etc.) y metas políticas, una de las cuales fue tempranamente la del cambio de la Constitución Política del Estado.

En los pronunciamientos públicos y las dinámicas de algunos actores movilizados se pueden reconocer explícitamente estos avances. Sin embargo, otra cosa es la manera en que estas aspiraciones de cambio se puedan materializar. En este último sentido, el movimiento de la sociedad enfrenta los viejos problemas de táctica y estrategia, que cada grupo o ciudadano propone y debate en sus asambleas y encuentros.

Teniendo en cuenta estos rasgos del actual movimiento ciudadano, si bien hay metas y aspiraciones de cambio que puedan favorecer las movilizaciones de marzo, el movimiento no se agota en esta coyuntura, por muy relevante que ella sea. Sus tiempos son más largos, y se relacionan con los modos en que el propio pueblo –hoy día en *estado de asamblea*, en muchos lugares del país- procesa y re-elabora su propia historicidad, la de su emancipación, más de una vez enajenada por el Estado clasista y sus lógicas de dominación. En este último sentido, no hay Asamblea o Encuentro donde se debate sobre el actual momento donde no se convoque a la historia y la memoria para tomar posición y

⁶ Tomo este concepto de un conjunto de ensayos de Rita Segato, que a su vez lo reelabora a partir de los escritos del recientemente fallecido sociólogo peruano, Aníbal Quijano. En: Rita Segato. *La crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Y una antropología por demanda*. Prometeo Libros, Buenos Aires, 2018

⁷ Mario Garcés. *Estallido Social y una nueva Constitución para Chile*. LOM Ediciones, Santiago, mayo de 2020

definir mejor cómo se debe enfrentar la coyuntura. Es que las luchas emancipatorias –con sus victorias y derrotas- no son nuevas en Chile y eso lo saben quiénes hoy se movilizan.

Hasta ahora y empezando marzo, se reactivan las Asambleas en los barrios, comenzaron las movilizaciones de los estudiantes y el movimiento feminista toma sus iniciativas y pudiera ejercer un importante liderazgo. El 8 y 9 de marzo pueden ser un claro indicador de esta perspectiva. Pero, aún no está asegurada ni la unidad ni la articulación suficiente del movimiento ciudadano, que además debe zanjar sus diferencias con relación al Plebiscito del 26 de abril, en el sentido de participar o boicotear dicho evento. Las movilizaciones de marzo, tal vez puedan ayudar a dilucidar mejor este dilema, por lo demás histórico, de cuanto actuar dentro y fuera de la institucionalidad. Pero, claro, el movimiento debe evitar dividirse subordinando los problemas estratégicos a un asunto más bien de carácter táctico. Se puede y es preferible combinar firmeza estratégica con flexibilidad táctica.

Santiago, 4 de marzo de 2020.